

Entrevista Presidente de Seopan

Julián Núñez

“Donde no lleguen los fondos europeos debería entrar la colaboración público-privada”

La asociación de constructoras pide concesiones capaces de atraer inversión y la revisión de la ley de contratos por el alza de las materias primas ▶ Están en duda la viabilidad de la obra en curso y el éxito del plan Next Generation

JAVIER F. MAGARIÑO
MADRID

La construcción teme pérdidas por el encarecimiento de las materias primas. A juicio del presidente de Seopan, Julián Núñez, está en juego la ejecución de la obra en curso, por lo que urge una norma temporal que reequilibre los contratos y la vuelta del mecanismo de revisión de precios a los pliegos. La tensión en los suministros y las desviaciones de costes afectan incluso a la viabilidad de próximos proyectos con fondos europeos. Núñez reclama ambición para aprovechar hasta el último euro de las subvenciones y préstamos del Next Generation, pero “no será suficiente para atajar el déficit de inversión si no se abre paso a la colaboración público-privada”.

¿Puede cuantificar el problema de la inflación de las materias primas en la obra pública?
La cesta de materiales en una obra tipo representa entre el 33% y el 40% del coste total, por lo que cada punto porcentual de alza en su precio de adquisición eleva entre 0,33 y 0,40 puntos porcentuales el citado coste total. Y ello representa entre 10% y el 13% del margen neto del contrato de ingeniería civil, cuantificado por la central de balances del Banco de España en un 3,13%. El encarecimiento de las materias primas consume el margen neto de las obras en curso e incluso inflige pérdidas de tal magnitud que hacen inviable la ejecución.

Han pedido la revisión de los contratos en marcha. ¿conoce ya la opinión de la Administración?

Nos hemos centrado en la Administración Central y esperamos que sean receptivos. Las presiones inflacionistas en las materias primas siempre han existido. En la historia reciente hay casos como los de los ligantes y el acero, y en los próximos años seguirá sucediendo. Por ello, tenemos que recuperar la obligatoriedad de la revisión de precios en los contratos. La ley de Desindexación hizo que pasara a discrecional, lo que ha motivado la desaparición de este modelo.

¿Podrían afectar estas tensiones a proyectos basados en la ayuda que viene de Europa?

Claro. Estos vienen con plazos y la escalada de las materias primas se va a mantener como mínimo hasta finales de 2022. El incremento de la demanda en China y los planes de inversión en numerosos países van a contribuir a ello.

¿Cómo puede reequilibrarse una obra si no se ha contemplado en el pliego?

Como la mayoría de los contratos carecen de la revisión de precios, urge diseñar una norma extraordinaria que rija mientras dure este proceso inflacionista.

Pero parece utópico abrir cada uno de los contratos en marcha. Debe ser una norma general, de interpretación sencilla y que vaya acompañada del cálculo del impacto real del alza en los precios. Creemos que es posible desde un punto de vista jurídico. Y para las nuevas licitaciones, la incorporación obligatoria del proceso de revisión de precios servirá de protección al propio sector público. Y es que garantiza que los procesos

inflacionistas no vayan a afectar al cumplimiento de los plazos de la inversión.

De no salir adelante esa norma extraordinaria, ¿cuál sería el escenario?

Será imposible garantizar la ejecución de los contratos en plazo. Habría que verlo caso a caso, pero estoy seguro de que motivaría ralentización y paralización en las obras. Otro problema es la falta de disponibilidad de ciertos materiales. La crisis de la automoción por los chips, que está afectando a cadenas de producción en nuestro país, es extrapolable a la actividad de muchas constructoras.

¿Puede poner algún ejemplo?

La cal para la estabilización de terraplenes ha subido su precio en 25 veces. El acero corrugado, el aluminio, los betunes asfálticos, el cobre... Todos traen subidas cercanas o superiores al 100%.

¿La alarma es internacional?

La FIEC se lo ha comunicado a la Comisión Europea, y esta ha recomendado que no se penalice a las empresas por el incumplimiento de los plazos contractuales y que se busquen soluciones para registrar el incremento real de los precios. Este es un problema global, no solo de España.

Y enlaza con la crisis del coronavirus.

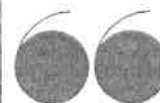
El golpe de la situación sanitaria se ha dejado sentir en la producción, con un decrecimiento en España del 9%, pero más aún en la paralización de procesos de contratación. La licitación se ha visto afectada en un 35% y la contratación pública en un 40%, lo que se traduce en



El plan Next Generation será de mucha ayuda, pero no va a cubrir el déficit de inversión que existe en España



El encarecimiento de las materias primas inflige pérdidas en las obras que hacen inviable la ejecución



Urge una norma extraordinaria que reequilibre los proyectos en curso y la vuelta de la revisión de precios a los pliegos



que la producción de este año va a sufrir una nueva bajada.

Vienen los fondos del programa Next Generation, para el que hubo una llamada del Gobierno al sector privado. ¿Está esperanzado el sector de la construcción?

Los fondos son una ayuda muy importante, pero no van a cubrir el déficit de inversión en nuestro país. El año pasado presentamos una estimación de 157.000 millones en necesidades de inversión, y un estudio más reciente y adaptado al Next Generation cifra el déficit en 100.000 millones. Dentro del plan de recuperación, la parte de los fondos destinados a infraestructura física y rehabilitación representan el 26%: 18.000 millones. De ahí, 11.500 millones van a infraestructuras de transporte e hidráulicas, un 16,6% del plan. Al sector le hubiera gustado que estas cifras fueran algo superiores. Mire el plan de Italia, reserva un 48,5% de los fondos para la inversión física en infraestructuras.

Solo el tercer ciclo de planificación hidrológica, presentado por el Ministerio de Transición Ecológica, identifica actuaciones por 21.000 millones en los próximos cinco años. Y de esta cifra, 8.000 millones corresponden a la Administración General del Estado, que tiene previsión de fondos para garantizar la ejecución. ¿Qué ocurre con los otros 13.000 millones que son titularidad de las Comunidades Autónomas? No hay recursos para ejecutarlos. Creemos que donde no llegan los fondos, debe entrar de lleno la colaboración público-privada. Este es uno de los desafíos más importantes que tenemos que hacer frente en este país.